EL PASADO QUE NO PASA

**LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
A LOS OCHENTA AÑOS DE
SU FINALIZACIÓN**

EDUARDO HIGUERAS

ÁNGEL LUIS LÓPEZ VILLAYERDE

SERGIO NIEVES CHAVES

(COORD.)

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

El pasado que no pasa: la Guerra Civil española a los ochenta años de su finalización

Eduardo Higuera Castañeda

Ángel Luis López Villaverde

Sergio Nieves Chaves

(Coordinadores)

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Cuenca, 2020

EL PASADO QUE NO PASA: LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA A LOS OCHENTA AÑOS DE SU FINALIZACIÓN

La Guerra civil española (1939-1936), 80 años después, Albacete, 29 y 30 de octubre de 2018 / coordinado por, Eduardo Higueras Castañeda, Ángel Luis López Villaverde, Sergio Nieves Chaves.– Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020

520 p. ; 29,7 cm.– (Jornadas y Congresos ; 26)

ISBN 978-84-9044-374-3

1. España – Historia 1936-1939 (Guerra civil) I. Higueras Castañeda, Eduardo, coord. II. López Villaverde, Ángel Luis. III. Nieves Chaves, Sergio IV. Universidad de Castilla-La Mancha, ed. V. Título VI. Serie 94(460)“1936/39”

NHD – 1DS3 – 3JK

© de los textos e ilustraciones: sus autores

© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, CEDOBI, Seminario Permanentes de Estudios Contemporáneos.

Colección JORNADAS Y CONGRESOS n.º 26

Revisores: Alba Nueda Lozano y Sergio Nieves Chaves.

Imagen de cubierta: Aviones nacionales derribados por los republicanos. Biblioteca Digital Hispánica. CC BY-NC-SA 4.0. Recuperado de <http://shorturl.at/lrvAT>

El procedimiento de selección de originales se ajusta a los criterios específicos del campo 10 de la CNEAI para los sexenios de investigación, en el que se indica que la admisión de los trabajos publicados en las actas de congresos deben responder a criterios de calidad equiparables a los exigidos para las revistas científicas y capítulos de libros.

El Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos (SPEC) es un grupo de investigación emergente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta edición ha contado con financiación de la UCLM a través de fondos FEDER de la Unión Europea.

El Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI) es un centro mixto de investigación del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” (IEA) y de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Seminario Permanente
Estudios Contemporáneos

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional

I.S.B.N.: 978-84-9044-374-3 (Edición impresa)

D.O.I.: http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.00

Composición: Compobell

Hecho en España (U.E.) – Made in Spain (U.E.)

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Impreso en España (U.E.) – Printed in Spain (E.U.)

ÍNDICE

Presentación	11
<i>Ángel Luis López Villaverde, Eduardo Higuera Castañeda y Sergio Nieves Chaves</i>	
El frente de Granada: vida cotidiana y bombardeos aéreos y marítimos	15
<i>Francisco Jesús Martín Milán</i>	
Medios acorazados en la guerra civil española	29
<i>Juan Pastrana Piñero</i>	
Bombas que nunca mataron: el sabotaje pacífico durante la guerra civil española	43
<i>Alfonso López García</i>	
Propaganda, música y sabotaje en la guerra civil española: canciones patrióticas premiadas por la Junta Recaudatoria Civil de Zaragoza	57
<i>Marco Antonio de la Ossa Martínez</i>	
La lucha en la retaguardia. La Brigada Terry, Madrid 1936.....	81
<i>Robert Duró Fort</i>	
Burgos bajo sospecha: la investigación de los servicios secretos para desarticular un posible complot contra Franco durante la guerra civil	97
<i>Clara Sanz Hernando, Miguel A. Moreno Gallo y José María Chomón Serna</i>	
Una lenta e intensa agonía: el desgaste de la retaguardia republicana por el hambre a través del abastecimiento de Madrid en el último año de la guerra (1938-1939)...	113
<i>Ainhoa Campos Posada</i>	
La quinta columna en la retaguardia republicana de Cataluña	127
<i>Javier Rodríguez Abengózar</i>	
La CNT y la Comarcal de Quintanar de la Orden, ¿Anarquistas o fascistas?	143
<i>Vicente Torres Encinas</i>	
Octubre de 1934 en la represión de guerra y postguerra en Ciudad Real	155
<i>Juan Carlos Buitrago Oliver</i>	
Revolución, violencia, contrarrevolución: Almagro, 1936-1939*	169
<i>Ángel Luis López Villaverde</i>	
La justicia republicana durante la guerra civil: los tribunales Especial Popular y Especial de Guardia de Cuenca	189
<i>Sergio Nieves Chaves</i>	
La represión en grupo como búsqueda de la “ejemplaridad” y la coacción por la jus- ticia del miedo	207
<i>Esmeralda Muñoz Sánchez, María Sol Benito Santos</i>	

Cárceles españolas durante la guerra civil: la verdad intramuros.....	223
<i>María José Palazón Pagán</i>	
<i>Nuestra Lucha</i> (1936)	237
<i>Joaquín Navarro Caravaca</i>	
La contribución de las salmantinas a la financiación de la guerra civil: una nueva modalidad de participación femenina	247
<i>M.^a Luz de Prado Herrera</i>	
Milicianas, guerrilleras y mujeres de rojo: tres modalidades de lucha y resistencia frente a los sublevados. El ejemplo de León	263
<i>Beatriz García Prieto</i>	
Mujeres combatientes en el ejército popular de la República (1936-1939).....	277
<i>Sara Hernández Martín y Luis A. Ruiz Casero</i>	
De la documentación a la presentación del patrimonio de la guerra civil española: el caso del nido de ametralladoras de Alhama de Murcia (Murcia, España).....	293
<i>Víctor Manuel López-Menchero Bendicho, Herbert D. G. Maschner, Francisco José Fernández Guirao, Jeffrey DuVernay, Miguel Ángel Hervás Herrera, James Bart McLeod, Aurelia Lureau y José Baños Serrano</i>	
Los fortines de los rojos. Búnkeres de la costa catalana: patrimonio inmueble de la guerra civil en riesgo	307
<i>Anna Soret Miravet</i>	
¡Sabotaje! Arquitectura militar y defensa de costas entre Murcia y Almería durante la guerra civil española.....	325
<i>Francisco José Fernández Guirao</i>	
“Vivir y morir en la trinchera”. Patrimonio, memoria y didáctica del frente de San Isidro (Puebla de Lillo, León).....	339
<i>Víctor Bejega García, Irene García Lino y Eduardo González Gómez de Agüero</i>	
Aprender investigando: la imagen de las mujeres republicanas en la prensa gráfica durante la guerra civil española (1936-1939).....	353
<i>Félix González Chicote</i>	
Enterrar a los muertos. Explicar las fosas comunes de la guerra civil a través de los clásicos de la literatura	375
<i>Alejandro Lillo</i>	
Reescribiendo Guadalajara. El tratamiento iconográfico de la guerra civil española en los primeros números de <i>El Legionario</i>	381
<i>Daniela Aronica</i>	
<i>Il tesoro degli anarchici</i> . El exilio italiano en España y la compra de armas para la República: algunos pícaros y un ministro, 1936-1937.....	397
<i>Antonio Calzado Aldaria y Bernat Martí i Pellicer</i>	
La sección francesa del <i>Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo</i> y la guerra civil española (1936-1939).....	407
<i>Rocío Negrete Peña</i>	
Brigadistas sanitarios en la guerra de España. De la solidaridad internacional a los campos nazis.....	423
<i>Esteban González López y Rosa Ríos Cortés</i>	

La dimensión internacional de la salida del Consejo Nacional de Defensa, marzo de 1939.....	435
<i>Eladi Mainar Cabanes, Robert Llopis i Sendra</i>	
La evolución ideológica de los militares: al golpismo o la defensa de la II República. Los ejemplos del general Fanjul y el teniente coronel Fernández Navarro	445
<i>Herminio Lebrero Izquierdo</i>	
Poder y resistencia después de la guerra civil española: el caso de Teresa/Florencio Pla Messeger	461
<i>Lisette Rolón Collazo</i>	
Aproximación al estudio de la represión política de posguerra, a través del fondo de la cárcel provincial de Cuenca (1939-1945).....	477
<i>María Isabel Jiménez Barroso</i>	

La justicia republicana durante la Guerra Civil: los tribunales Especial Popular y Especial de Guardia de Cuenca

Sergio Nieves Chaves*

Universidad de Castilla-La Mancha

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.12

INTRODUCCIÓN

Entre las diversas cuestiones que se han abordado sobre la guerra civil española ocho décadas después de su finalización, la justicia impartida por las autoridades republicanas a lo largo del conflicto ha sido una de las marginadas, tradicionalmente, por la historiografía. Desde que en 1938 Niceto Alcalá Zamora (1944) escribiera un artículo sobre la justicia penal donde detallaba el significado, las funciones y los procedimientos que eran seguidos tanto en la zona republicana como en la rebelde, y hasta principios de los 70, cuando en los estudios de carácter general de los hispanistas Gabriel Jackson (1967: 244) y Hugh Thomas (1971: 306) se aludía someramente a los tribunales populares, este asunto apenas tuvo presencia en el debate académico. No obtuvo verdadera atención hasta 1987 cuando, con motivo del cincuentenario de la guerra, el Archivo Histórico Nacional organizó en Salamanca unas jornadas con el fin de “solventar” esta laguna historiográfica, debatir la naturaleza y actuación de la justicia impartida en ambas zonas, compararlas y determinar las posibilidades y el valor de las fuentes para el estudio de la Administración de Justicia en guerra (MINISTERIO DE CULTURA, 1990).

Poco después, la publicación de la obra de Sánchez Recio *Justicia y Guerra en España* (1991) suponía una aportación sobresaliente por varios motivos: a través de los textos producidos por los juzgados y tribunales especiales de algunos lugares, de la Causa General y de la prensa contemporánea afecta a cada bando, precisó el significado de justicia popular y abordó la organización y funcionamiento de la misma en aquellos años, profundizando en los condicionantes de su evolución y “normalización” y haciendo especial hincapié en la influencia que ejerció sobre la opinión pública en la retaguardia y el hecho de convertirse en noticia en la prensa de la época. Un estudio, por tanto, novedoso que proporcionaba los primeros datos sobre la actuación de distintos tribunales y que ha perdurado hasta la fecha como una obra de referencia ineludible. Junto a las aportaciones de las jornadas en Salamanca, asentaron las bases para posteriores

* Este trabajo se ha desarrollado en el marco del grupo de investigación Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos de la Universidad de Castilla-La Mancha (SPEC) con el apoyo de un contrato para la formación del personal investigador en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

estudios de esta naturaleza; estudios que han encontrado cierta continuidad y constancia hasta nuestros días y que se refieren a distintos espacios de la geografía española¹.

En el caso de la actual Castilla-La Mancha, se cuenta con reseñables contribuciones para los casos de Albacete y Ciudad Real² y algunas referencias para Toledo y Guadalajara³. Un balance desigual que requiere una atención inmediata, entre otros motivos, porque se trata de una temática relevante para conocer la guerra en toda su complejidad y, especialmente, asuntos estrechamente vinculados como son la conspiración, la violencia de las primeras semanas o el espacio de retaguardia. Por ello, la presente comunicación tiene como objeto de estudio la justicia popular republicana durante la guerra en una provincia de retaguardia como fue Cuenca. El principal objetivo es conocer la actuación y protagonismo de dos de los tribunales que se instauraron en la ciudad e intervinieron en toda la provincia, el Tribunal Especial Popular —TEPC— y el Tribunal Especial de Guardia —TEGC—. Se analizan los procedimientos que llevaron a cabo, los delitos que juzgaron, las penas que aplicaron y el carácter y la distribución geográfica de los encausados.

Entre las fuentes empleadas destacan, ante todo, los inéditos Libros de Sentencias de ambos tribunales conservados en la Audiencia Provincial de la ciudad —AAPC—. También, imprescindible en este tipo de investigaciones a pesar de su naturaleza represiva, subjetividad y finalidad propagandística (SÁNCHEZ RECIO, 1993: 24-27), la Causa General de Cuenca conservada en el Archivo Histórico Nacional —AHN, FC-CG— y, en especial, la *Pieza Quinta: Justicia Roja*. Finalmente, otras fuentes no menos importantes como la prensa local o el Boletín Oficial de la provincia —BOPC—. A través de este examen se pretende contribuir al conocimiento de lo que supuso, en términos generales, la justicia de la República en guerra y, en particular, de la provincia citada.

1. CONSPIRACIÓN Y SUBLEVACIÓN DE JULIO DE 1936 EN CUENCA

El triunfo electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 agudizó el antagonismo sociopolítico que se venía fraguando desde tiempo atrás y motivó la tentativa golpista de la derecha. La creciente polarización y tensión política del país a lo largo de la primavera fue creando un clima de violencia y un ambiente propicio para que los sectores conservadores justificaran la necesidad de un golpe de estado militar para acabar con el régimen republicano (MORADIELLOS GARCÍA, 2016: 73-83). En Cuenca, los resultados de las elecciones de mayo para la provincia y la capital dieron la victoria al Frente Popular, “experimentando un vuelco respecto a los de febrero”, que habían sido anulados (LÓPEZ VILLAVERDE, 1997: 303). A diferencia de otras poblaciones, se respiró un aire de relativa tranquilidad, si bien no fue ajena a algunos episodios de reyertas y enfrentamientos ocasionales entre jóvenes militantes falangistas y anarquistas, sobre todo a partir de las referidas elecciones. Entre tanto, los primeros preparativos de la conspiración se pusieron en marcha.

En Castilla-La Mancha, la conspiración adquirió distintos matices en función de si la iniciativa la asumieron contingentes civiles o la propia Guardia Civil y otros mandos militares⁴. En el caso de Cuenca, la indecisión en el seno de la Guardia Civil se suplió con la movilización de Falange, a pesar de su número limitado de afiliados y su descoordinada organización

1 Una relación actualizada de estos estudios puede verse en ROLDÁN CAÑIZARES (2018).

2 En el caso de Albacete: MORCILLO ROSILLO (1988); ORTIZ HERAS (1995); SEVILLANO CALERO (1995). Respecto a Ciudad Real: MUÑOZ DE MORALES CORRAL (2007); ALÍA MIRANDA, F. (2017). Este último, recientemente reeditado, supone un ejemplo del interés de la retaguardia para la comprensión del conflicto en todas sus dimensiones, así como la obra de CERVERA GIL (2006).

3 Respectivamente, SABÍN RODRÍGUEZ (1994) y BERLINCHES BALBACID (2015: 71-86).

4 Para un estudio pormenorizado de la conspiración y los principales modelos del alzamiento en cada una de las provincias castellanomanchegas, véase ALÍA MIRANDA (2008).

(RODRÍGUEZ PATIÑO, 2003: 55). Desde el principio, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco García de Ángela San Román, se mostró reacio al complot, al igual que otros pocos oficiales y tuvo que mediar. El resto, por el contrario, mostraron su inclinación y abogaron por ella, entre ellos el teniente Benítez González y el Capitán Carmelo Martínez. Ambos trataron de persuadir a García de Ángela y diseñaron un plan de actuación. Carmelo Martínez, finalmente, sería descubierto en conversaciones con otro de los partidarios de la trama, el Gobernador Militar de la plaza Manuel Romeo Aparicio. Ambos fueron detenidos por conspirar contra el gobierno legítimo (ALÍA MIRANDA, 2008: 332).

Por lo que respecta a Falange, desde el principio tuvo la esperanza de contar con el apoyo de la fuerza de orden público. Fueron representantes de esta agrupación quienes alentaron a la Guardia Civil para su incorporación a los planes subversivos (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1998: 73). Desechada esta posibilidad, el plan de los falangistas era apoderarse en primer lugar del Gobierno Civil tras asegurar armamento y efectivos. El 25 de marzo su cúpula fue detenida bajo la acusación de asociación ilícita, aunque al poco tiempo fue liberada. Sería en la madrugada del 13 al 14 de julio, ante las informaciones de la redada y detención de casi dos centenares de jefes provinciales y locales a nivel nacional, cuando se detuvieron nuevamente a los principales cabecillas del complot en Cuenca. Todos ellos fueron asesinados en las primeras semanas de guerra (RODRÍGUEZ PATIÑO, 2003: 60-61). De este modo, la Falange conquense perdió toda su efectividad y operatividad a las puertas de la sublevación.

A la altura del 17 de julio, la situación en Cuenca era ambigua: por un lado, García de Ángela, a pesar de no haber sido proclive a la sublevación, como se ha mencionado, esperó prudentemente noticias de Madrid. Entre tanto, la presión miliciana fue en aumento, patrullando y asegurándose los principales centros de poder. Los pocos falangistas que aún quedaban en libertad intentaron revertir la situación sin resultados. Con motivo de la caída del Cuartel de la Montaña y de Guadalajara en manos milicianas, García de Ángela se decantó, definitivamente, por la causa republicana, haciéndoselo saber al Gobernador. Como señala Rodríguez Patiño, esta decisión probablemente fue tomada debido a que “en la zona centro el aislamiento era ya evidente dentro de la estructura general de la conspiración” (2003: 73).

Aunque todo parecía estar dominado, una posible pérdida habría supuesto enormes consecuencias para la zona centro. Fruto de ello, la Federación Provincial de la CNT transmitió a su Comité de Defensa Nacional las sospechas, enviando la sede central a Cipriano Mera y sus milicias madrileñas. Tras haberse convertido en una figura singular por su participación en la recuperación de Alcalá de Henares o Guadalajara, sus hombres y él permanecieron en la provincia rearmando a los conquenses que siguieron sus pasos y presionando al Gobernador para resolver la situación con la Guardia Civil. Así, todas las fuerzas de orden público de la provincia fueron reunidas el día 26 con la voluntad de evitar posibles atisbos subversivos y asegurar su control. La propia Guardia Civil quedó recluida en el edificio del Seminario bajo vigilancia miliciana. Apenas dos días más tarde, Mera tuvo que regresar a Cuenca dadas las noticias de un inminente alzamiento en la ciudad por parte de la Guardia Civil. En esta ocasión, el dirigente anarquista actuó con determinación sobre el Gobernador, quien llevó a cabo la salida inminente de aquel cuerpo de la ciudad (MERA, 1976: 25).

Las dudas de la Guardia Civil —único cuerpo en condiciones de efectuar el levantamiento en la ciudad—, la negativa de García de Ángela y algunos oficiales, el desmantelamiento de las operaciones falangistas locales y su encarcelamiento y fusilamiento, la escasa presencia de guarniciones militares y la contundente actuación del Frente Popular, el Gobernador Civil Antonio Sánchez Garrido y las milicias populares fueron las variables para que el triunfo del alzamiento se viera frustrado. En suma, Cuenca y su provincia quedaron configuradas como una zona de retaguardia republicana hasta su toma el 29 de marzo de 1939 por las fuerzas sublevadas.

2. DE LA VIOLENCIA ARBITRARIA A LA JUSTICIA ESTATAL

Cuenca no fue ajena a la espiral de violencia que se dio en todo el país con motivo de la rebelión militar. La cota de violencia dada en los meses previos se agudizaría en las semanas posteriores, si bien ahora al margen de cualquier marco legal. En los últimos días de julio y durante el mes siguiente, ante la lógica sublevada de las armas y la eliminación del “otro” como mecanismo asegurador del orden social en la retaguardia (LEDESMA VERA, 2010: 157), surgieron distintos comités y cuadrillas de milicianos armados que actuaron de forma independiente del poder central ocasionando muertes y otros actos de represión⁵. Así, para algunos, la persecución y la eliminación física de sus promotores, al igual que de la comunidad religiosa, falangistas o militantes de Acción Popular, se convirtió en la principal misión en la retaguardia conquense. Aunque como indica Ledesma Vera, esta violencia respondía más a una lógica contragolpista, a pesar de los procedimientos y preocupaciones legales que efectuaron (2010: 158). Además, “el hecho de ser un enclave pequeño agudizó las rencillas personales, quebró la libertad individual y fracturó la paz civil” (RODRÍGUEZ PATIÑO Y DE LA ROSA RICO, 2009: 180).

Aquellas organizaciones y grupos revolucionarios que pugnaron por hacerse con los espacios de poder dentro de la nueva coyuntura sociopolítica entendieron que “administrar justicia” pasaba por la gestión propia de la violencia, al margen de todo ordenamiento jurídico⁶. En Cuenca, la CNT-FAI, a través de su Comité de Salud Pública, procedió a la ejecución de varios sospechosos que habían sido denunciados, sin juicio ni posibilidad de defensa. Igualmente, las Juventudes Libertarias, que controlaron una de las checas más activas de la ciudad, interrogaron y torturaron a otros cuantos detenidos para extraer diversas informaciones (RODRÍGUEZ PATIÑO, 2004: 115). La Columna del Rosal fue uno de los grupos con mayor actividad al respecto. Entre agosto y septiembre dirigieron la mayoría de “sacas” que tuvieron lugar, si bien se prolongaron hasta final de año. Según cifras contrastadas por Rodríguez Patiño, más de un centenar de víctimas hallaron la muerte en el término municipal entre julio y diciembre de 1936 (2009: 202-203).

Con el propósito de contrarrestar y atajar los niveles de violencia arbitraria e irregular ejercida por las organizaciones, milicias populares y particulares, las autoridades republicanas emprendieron una serie de medidas legales. Entre ellas, la reorganización de una Administración de Justicia que había quedado desarticulada y permanecía casi inoperativa desde el 18 de julio. En este sentido, lo más importante fue la creación de los llamados Tribunales populares para “juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado”⁷. La creación de un Tribunal Especial en Madrid por decreto de 23 de agosto de 1936⁸, poco después de producirse el asalto de la cárcel Modelo, y su extensión en los días siguientes por el resto de las provincias leales a la República, significó el ejercicio de la represión legalizada (SEVILLANO CALERO, 1995: 119) y el control político y judicial en la retaguardia (SÁNCHEZ RECIO, 1994: 588).

Aunque al principio nació como una justicia “de excepción” y provisional por el propio contexto de guerra, paulatinamente se sistematizó hasta convertirse en una justicia normalizada y dura-

5 El término “incontrolados”, presente aún en muchos estudios, se ha comenzado a discutir en los últimos años. Algunos autores como LEDESMA VERA (2010) proponen hablar de “grupos de acción”. Igualmente, recientes investigaciones han puesto en entredicho que aquella violencia fuera responsabilidad única y exclusiva de anarquistas y que surgiera de la espontaneidad y la irracionalidad. Ver al respecto: RODRIGO (2008); RUIZ (2012); GÓMEZ BRAVO (2014); MARTÍN NIETO (2014).

6 Esto era la “justicia legal revolucionaria”. Querían que esa justicia tuviera un carácter popular con miras a consolidar la revolución y, de la mano, derribar el anterior proyecto de justicia social que consideraban “burgués”.

7 Con anterioridad, las declaraciones de justicia popular conocieron otras formas judiciales tales como los comités revolucionarios, los tribunales revolucionarios o los Comités de Salud Pública.

8 *Gaceta de Madrid*, nº 237, 24/08/1936.

dera (SÁNCHEZ RECIO, 1991: 59). Los nuevos Tribunales se crearon para canalizar los ánimos de aquellos grupos radicalizados y legitimar esa “justicia por consenso” de los primeros instantes⁹. No obstante, hay quienes vieron esta nueva justicia como una mera farsa sobre la que legitimar una revolución que tenía que erigirse sobre la eliminación del adversario o como un instrumento para defender los intereses de clase en favor de sindicatos y partidos (ORTIZ HERAS, 1996: 24-25). Entre las características más significativas de los nuevos organismos estaba la aplicación del procedimiento sumarísimo y la figura del Jurado, sección de hecho en la que se dio cabida a los representantes de las organizaciones políticas y sindicales. Si bien dichos Tribunales actuaron en toda la zona republicana, lo cierto es que su actuación no fue unitaria. Más bien, cada uno de los Tribunales implantados actuó con cierta autonomía en función de las circunstancias en que se vieron inmersos (SÁNCHEZ RECIO, 1991), inclusive los que se analizan a continuación.

3. EL TRIBUNAL ESPECIAL POPULAR DE CUENCA

Su instauración se produjo el día 4 de septiembre de 1936. Estaba constituido por los jueces de primera instancia de San Clemente y Motilla del Palancar, Victoriano Juvencio Escribano Ruipérez y Víctor Serván Mur, bajo la presidencia de Pablo Santolaya Cascajo, presidente de la Audiencia Provincial de la propia capital¹⁰. Junto a ellos figuraban catorce jurados en representación de las siete formaciones políticas y sindicales que conformaban el Frente Popular¹¹ y dos Magistrados, Juvencio Escribano Martínez y Eugenio Tarragato Contreras. Aquilino Martín Lázaro aparecía como secretario del Tribunal. El día 11 de septiembre emitió su primera sentencia en la que juzgaba al sacerdote de Villalgordo del Marquesado, Constantino Fornier Casas. A la contestación afirmativa por el Jurado de que el párroco, consciente de la sublevación provocada contra el gobierno legítimo, se había alzado públicamente, había abandonado su función y se había dirigido al campo en unión de otras personas encaminado al fin expresado, era condenado por sedición a 2 años, 11 meses y 10 días de prisión menor¹². Una primera sanción que, si se compara con la acaecida en otros espacios de la retaguardia, llama poderosamente la atención por su benevolencia.

Tabla 1. Relación de Sentencias-Encausados del TEPC por año

Año	Nº de sentencias	Nº de encausados
1936	5	19
1937	117	224
1938	156	255

Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

9 Legitimar esa justicia implicaba que los partidos y organizaciones sindicales cedieran al Estado la responsabilidad de encaminar aquella situación de desorganización y violencia a cambio de formar parte de las decisiones gubernamentales. Lo de “justicia por consenso” en ALBA, 1990.

10 “Orden disponiendo se constituya en Cuenca un Tribunal Especial que ha de juzgar los delitos de rebelión y sedición”, *BOPC*, nº 107. Sección de la Gaceta. Ministerio de Justicia, 4/9/1936.

11 Dos miembros por cada una de las organizaciones políticas y sindicales: Víctor Carrascosa y Emilio Martínez de UGT; Enrique Girón y Ángel Pérez Navarro del Partido Comunista; Elías Cruz Moya y Gerardo Alcañiz Turégano de CNT; Jorge Fernández y Adrián Pastor de Izquierda Republicana; Lorenzo Alarcón Pérez y Celestino del Olmo de Agrupación Socialista; Félix Arias Martínez y Nemesio Pérez del Moral de Juventudes Socialistas Unificadas; y Acisclo Álvaro y Julián López de Unión Republicana. La relación completa de Jurados en: “Lista de Jurados Efectivos y Suplentes del Tribunal Popular”, *Heraldo de Cuenca*, nº 90, 14/9/1936.

12 Además, habían sido encontrados en la Iglesia que regentaba seis cartuchos de escopeta y ocho balas de calibre doce, cuya procedencia no supo explicar.

Desde entonces, y hasta el 31 de diciembre de 1938¹³, este Tribunal dictó 278 sentencias que afectaron a un total de 498 personas (tabla 1). A diferencia de otros lugares, donde el mayor ejercicio se dio durante 1936 y los primeros meses de 1937 juzgando delitos relativos a la rebelión, el periodo de mayor actividad del TEPC tuvo lugar entre mediados de 1937 y la primavera de 1938, momento en el que se emitieron más del 50% de los fallos y fueron condenados en torno al 60% de los inculcados (gráfica 1). Esto obedece, principalmente, a la ampliación competencial que los tribunales especiales experimentaron por Decreto de 23 de febrero de 1937 para conocer delitos de espionaje, comunes, entre otros (ROLDÁN CAÑIZARES, 2014: 433). Algunas vistas llegaron a implicar a un gran número de personas, aunque en la mayoría de las ocasiones comprendieron a una sola¹⁴.

Gráfica 1. Relación sentencias-encusados por meses (sept. 1936-dic.1938). Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

En lo referente al análisis de los inculcados cabe mencionar que la edad media de los mismos es de 38 años. Por grupos de edad, más de la mitad oscilan entre los 20 y los 40 años. Otro de los grupos destacados, con un total de 99 casos, es el que comprende los 41-50 años. Por su

13 Según la Secretaría de la Audiencia Provincial, el Libro registro de Sentencias del año 1939 no se encuentra en el interior de sus instalaciones. Se han localizado expedientes en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca vinculados a causas producidas en dicho año por lo que cabe pensar que bien existió, pero no ha llegado hasta nuestros días, o bien, las sentencias no llegaron a encuadrarse.

14 Entre las sentencias con 20 o más inculcados destacan: la nº 2 de 26/1/1937, contra varios vecinos de San Clemente acusados de conspiración para la rebelión que serían castigados con penas de 14 a 17 años de internamiento en campos de trabajo, excepto dos que fueron absueltos; la nº 46 de 20/8/1937, contra 24 vecinos de Henarejos, que venían acusados de sedición, aunque finalmente fueron condenados por desorden público, lesiones y tenencia ilícita de armas. Las penas oscilaron de 6 meses a 2 años de separación de la convivencia social en colonia de trabajo, a excepción de 4 absoluciones; y la nº 71 de 12/5/1938, contra 21 vecinos de Villanueva de la Jara por desafección al Régimen, resuelta con fallos absolutorios y e internamientos inferiores a 1 año. Por su parte, 213 sentencias, es decir, cerca de un 77%, comprometieron a un solo procesado. AAPC, Libros de sentencias del TEPC 1936-1937 y 1938.

parte, más del 60% son casados y cerca de un 30% solteros¹⁵. El número de mujeres juzgadas apenas es representativo, no llegando a superar el 10% del total. La categoría profesional más frecuente es la de los jornaleros seguida de la de los labradores. Juntos suponen 200 casos, es decir, un 40% del total. Las amas de casa, bajo el calificativo de “sus labores”, representan una cifra significativa en el conjunto profesional con 43 procesadas (gráfica 2).

Gráfica 2. Profesiones de los encausados.. Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938.

Elaboración propia

Una visión general de los delitos (gráfica 3) indica que, el más juzgado, muy alejado cuantitativamente del resto, se corresponde con el de desafección al Régimen, que afectó a 118 acusados¹⁶. Aquellos que tienen que ver con la rebelión propiamente dicha y sus distintas formas —esto es, adhesión, auxilio, conspiración o inducción— constituyen una categoría notable que implicó a 77 procesados. Este dato evidencia como el objetivo del nuevo aparato judicial fue, ante todo, perseguir a aquellos que podían haber colaborado en el triunfo del golpe militar en la provincia, se habían manifestado públicamente en favor de la sublevación o podían suponer un peligro potencial por su condición antirrepublicana¹⁷. No obstante, como podrá comprobarse en las siguientes líneas, el Tribunal también castigó los excesos cometidos por milicias, comités y particulares a pesar de la intransigencia mostrada por determinados grupos republicanos, que se mostraron reacios a que la nueva justicia exigiera responsabilidades a milicianos por su actuación en la retaguardia.

¹⁵ El porcentaje restante corresponde a aquellos acusados cuyo estado civil no se describe en los Libros de Sentencias.

¹⁶ Su conocimiento por parte del Tribunal comenzó a finales de abril de 1938. Entre los hechos por los que los procesados fueron culpados de este delito sobresalen: insultar y propagar bulos; haber hecho declaraciones en contra de los representantes del Frente Popular de las localidades y del gobierno legítimo por su actuación en los frentes de batalla; haber encontrado cartas manifestando su desafección; haber cantado y entonado “vivas al rey”, “viva Primo de Rivera”, “Arriba España” y “muerte a las izquierdas”; haber hecho propaganda de las derechas y perseguir a la clase obrera; negarse a la recogida de refugiados y dar cobijo a elementos falangistas o frailes; intentar asaltar la Casa del Pueblo; o guardar monedas de plata, retratos de exreyes españoles y banderas anticonstitucionales.

¹⁷ Quienes no pasaron por este Tribunal fueron los falangistas conspiradores del golpe en la capital, ya que habían sido fusilados por las milicias en las primeras semanas.

Gráfica 3. Delitos. Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

La primera acusación de rebelión tuvo lugar el día 22 contra cuatro vecinos de Torrubia del Campo. Unos días después del golpe militar, el procesado Antonio Morán Barranco salió a las calles del pueblo con el fin de instigar e inducir a sus convecinos, varios de los cuales se sumaron a él —entre ellos, los otros tres encausados y otros sin determinar— produciendo un levantamiento en el que se dejaron ver las armas y cuyo fin no era otro sino contribuir al “Movimiento” iniciado apenas días atrás en el resto de España. El fallo público del Tribunal condenaba a 25 años, 9 meses y 10 días de reclusión mayor a Antonio Morán en concepto de jefe; a 10 años de prisión mayor a Julián García Orozco y Joaquín Ayuso Velázquez, en concepto de ejecutores; y a 4 años y 2 meses de prisión menor en concepto de cómplice a la que fue la primera mujer procesada por el tribunal, Francisca Sánchez Paulete Grimaldo.

Tres días después, el Tribunal se reunía para fallar un nuevo delito de rebelión contra tres vecinos de Huete, penados a 25 años, 9 meses y 10 días de reclusión mayor. Los hechos se producían en la cercana población de La Peraleja. Nuevamente, un grupo de civiles de dicho pueblo, encabezado por los procesados, eran quienes protagonizaban “el hecho de alzarse en abierta hostilidad contra el gobierno a fin de despojar a este de las facultades que la Constitución le confiere”. El encausado José Vicente Saiz, actuando como jefe del grupo de vecinos, los reunió en su casa para inducir y determinar cómo debían de obrar. La misma noche del 18 de julio salían a la calle armados, obligando a las autoridades a recluirse en sus casas y a algunas a huir del pueblo, del que aquellos se apoderaron, organizando la defensa de este y permaneciendo dueños de la localidad hasta que el día 31 de julio llegaron milicianos de Tarancón que dominaron la situación. Fue entonces cuando el mencionado José Vicente Saiz huyó al campo. El día 8 de septiembre se entregó a las milicias de La Ventosa y el día 10 conducido para permanecer en prisión provisional y a espera del juicio que aquí se relata.

En cuanto a las penas impuestas (tabla 2), las sanciones más severas se dieron en los primeros meses, al igual que sucedió en el resto de los Tribunales de la retaguardia republicana. Septiembre de 1936 y enero de 1937¹⁸ puede establecerse como la primera y única fase represora. Durante este periodo emitió algunas de las penas más duras en el ejercicio de su función, tales como 25 años de reclusión mayor o 17 años de internamiento en campos de trabajo. Desde entonces, castigó con dureza en momentos puntuales, incluso, en una fecha tan avanzada como finales de diciembre de 1938, momento en el que impuso 30 años de internamiento a dos vecinos de El

18 Entre octubre y diciembre de 1936 no se tiene constancia de que el TEPC dictara sentencia alguna, desconociéndose los motivos de tal causa.

Peral y Madrid por el delito de adhesión a la rebelión¹⁹. A lo largo de su trayectoria vital, impuso 6 penas de muerte, cinco de ellas ejecutadas²⁰, estas últimas correspondientes a la sentencia nº 25 de 30 de mayo de 1937. Los inculpados fueron cuatro vecinos de Villamayor de Santiago y uno de Villanueva de Alcardete, entre ellos los alcaldes de respectivos pueblos, por el que fue, si cabe, uno de los acontecimientos más sonados y perturbadores de la guerra civil en Cuenca²¹. La repercusión de este hecho, conocido popularmente como “el asesinato de la Piedaita”, fue tal que llegó a recogerse en la prensa con todo detalle y del siguiente modo:

Los alcaldes de Villamayor y de Villanueva forman una “checa” y cometen violaciones, asesinatos, robos y secuestros (...). El Tribunal Popular de Cuenca ha visto y juzgado la causa por los crímenes del “Comité fantasma” que ha tenido aterrada a la comarca con sus fechorías hasta que la justicia del pueblo los ha condenado²².

Por su parte, los fallos más suaves —prisión menor²³, arresto o multas— se dictaron de forma simultánea, mostrándose progresivamente más corrientes desde junio de 1937. Las penas inferiores a seis años fueron las más comunes tras las absoluciones. Suponían un 25% del total. Entre ellas, cabe matizar que las más frecuentes fueron 4 meses y un día de internamiento en campo de trabajo y 6 meses de separación de la convivencia social en colonia de trabajo. Mención aparte merecen las absoluciones. Más de la mitad de las sentencias dictadas por el Tribunal declararon fallos absolutorios, en unos casos porque los acusados no habían sido protagonistas de los hechos por los que habían sido denunciados y, en otros, porque no acababan de comprobarse fehacientemente los hechos que se le habían imputado. La fuerte presencia de absoluciones en 1937, repartidas a lo largo de todos los meses, se vería aumentada en 1938, cuando el 85% de las sentencias emitidas fueron de este tipo.

Tabla 2. Penas impuestas

Año	Muerte	>20 años	12-20 años	6-12 años	< 6 años	Multa	Arresto	Absol.	Total*
1936	-	4	7	2	6	-	-	-	19
1937	6	1	24	14	61	16	4	108	234
1938	-	4	1	4	62	7	1	182	261
Total	6	9	32	20	129	23	5	290	514

Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

*El número de encausados y de penas no coincide porque a un inculcado le podían acusar de varios delitos en el mismo juicio, lo cual desembocaba en el dictado de una o varias penas en la misma sentencia. Igualmente, en un juicio se daban casos en los que un inculcado era acusado de varios delitos, pero el fallo emitido era solo uno.

19 Ambos pertenecían a un grupo que había permanecido oculto en diversos domicilios de pueblos de la provincia. En abril de 1937 se refugiaron en el monte con el fin de evadirse a campo faccioso. El 28 de dicho mes emprendieron la marcha y en las lomas de un cerro del término de Guadalaviar, fueron sorprendidos por fuerzas militares de caballería, iniciando los huidos un tiroteo donde resultaron muertos 4 evasores, sufriendo un herido leve las fuerzas militares afectas.

20 De acuerdo con la *Pieza Quinta: Justicia Roja* de la CG de Cuenca. La pena de muerte que no llegó a ejecutarse, la nº 2 de 26 de enero de 1937, afectaba a Juan Recuerda Jiménez por el delito de desertión.

21 Se trata del asesinato y violación de una joven y su madre en el lugar conocido como Casas del Luján, en la carretera de Villamayor a Saelices. Un estudio pormenorizado de este caso puede verse en CASES SOLA (2014).

22 “Las fechorías del ‘Comité Fantasma’ de Cuenca”, *Solidaridad Obrera*, nº 1613, 12/06/1937

23 Se ha considerado como tal aquellas penas inferiores a 6 años, meses incluidos.

Si se establece una relación entre los delitos y las penas, en líneas generales, la rebelión —y sus variantes— y el asesinato fueron las infracciones sobre las que recayeron las resoluciones más severas, esto es, muerte, reclusión mayor y 15-17 años de prisión mayor o internamiento. Por el contrario, las faltas, las lesiones, el robo, el hurto y los hechos constitutivos de desafección obtuvieron, mayormente, meses de prisión cuando no absoluciones. Lllaman la atención las 33 absoluciones por adhesión a la rebelión a vecinos, principalmente, de Uclés, Tarancón, Almonacid del Frente Popular —del Marquesado—, Tribaldos, Rozalén del Monte, Montalvo, Villares del Saz y Fuente de Pedro Naharro, previamente acusados de haber participado en saqueos, secuestros y asesinatos de vecinos de sus respectivos pueblos. El TEPC concluiría su no participación o toma de posición en los hechos.

Otra de las consideraciones a tener en cuenta si se interrelacionan las penas y las profesiones de los encausados es su carácter de clase o no. Los jornaleros representan el colectivo más característico, tanto por el elevado número como por el tratamiento que recibieron. Por un lado, más de la mitad fueron absueltos y sancionados con leves penas mientras que, por otro, obtuvo varias penas de muerte. Los militares y fuerzas de orden público, pese a su baja representación a causa de su muerte en los días siguientes a la declaración de guerra, también se saldaron en su mayoría con penas absolutorias. Otras categorías como la de los labradores o sus labores denotan, una vez más, la benevolencia del Tribunal con sanciones inferiores a los 6 años y el elevado número de absoluciones.

Tabla 3. Relación penas-profesiones*

Profesiones	Muer- te	> 20 años	12-20 años	6-12 años	< 6 años	Multa	Arresto	Absolución
Artesanos	-	-	3	-	9	2	-	17
Empleados	-	-	1	-	4	1	-	5
Albañiles	-	-	-	1	4	2	-	8
Jornaleros	4	-	2	4	28	4	3	77
Labr., hort. y campesinos	-	1	3	6	19	8	1	56
Militares y fuerzas. Ord. Pub.	-	1	1	1	2		-	8
Oficios	1	2	3	1	16	3	-	27
Prof. liberales	-	-	5	3	11	-	-	17
Sus labores	-	-	-	1	13	1	-	32

Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

*Solo se muestran algunas de las categorías más significativas.

Finalmente, en lo concerniente a la distribución de las penas por la extensa provincia, 133 pueblos (de un total de 291) vieron como alguno de sus vecinos era juzgado por el TEPC. Los 74 encausados de Cuenca capital la convierten, con diferencia, en el núcleo de mayor conflictividad durante la guerra. Entre los 10 y 30 implicados se encuentran núcleos como Casasimarro, Henarejos, San Clemente, San Lorenzo de la Parrilla, Tarancón, Uclés y Villanueva de la Jara. En función de partidos judiciales, Tarancón se muestra como el territorio jurisdiccional donde recayeron las penas más duras (tabla 4).

Tabla 4. Relación penas-partidos judiciales

Part. Judicial	Muerte	>20 años	12-20 años	6-12 años	< 6 años	Absol.	Multa	Arresto
Cuenca	-	1	1	3	39	80	7	-
Motilla del Palancar	-	1	6	-	18	50	-	-
San Clemente	-	-	11	5	5	20	-	1
Tarancón	4	1	4	10	6	50	1	3
Cañete	-	-	-	-	27	15	-	-
Priego	-	1	-	2	-	20	7	-
Belmonte	-	-	2	4	8	25	1	-
Huete	-	3	-	-	8	15	-	1
Desconocida	1	-	7	-	1	3	-	-
Otros	1	2	1	3	10	13	6	-

Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

4. EL TRIBUNAL ESPECIAL DE GUARDIA DE CUENCA

Estos Tribunales, creados por decreto de 29 de noviembre de 1937²⁴, pretendían reprimir los delitos flagrantes de espionaje, alta traición y derrocamiento previstos y penados en el decreto de 22 de junio del mismo año²⁵. Estaban compuestos por un presidente propuesto por el Ministerio de Justicia y dos vocales propuestos por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Gobernación. Además, contaba con el auxilio de dos agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia y guardias de seguridad según las necesidades. Con posterioridad, estos órganos ampliarían sus competencias, entre ellas, el conocimiento de las infracciones en materia de subsistencias (CANCIO FERNÁNDEZ, 2007: 91). El TEGC estuvo constituido, de principio a fin, por José María Olmedo Almeida como presidente²⁶ y por Francisco Marcos Rana y Victorio de Carlos Martínez como magistrados vocales.

Su primera sentencia fue dictada el 28 de junio de 1938. Se trataba de una resolución contra dos vecinos de Tarancón, Miguel Domínguez López y Jesús García Domínguez. Considerados los hechos de Alta Traición fueron condenados a 20 y 15 años de internamiento en campos de trabajo, respectivamente²⁷. Hasta el 31 de diciembre del mismo año, este Tribunal emitió 94 sentencias que implicaron a un total de 347 personas (gráfica 4). Octubre y noviembre fueron, claramente, los meses de mayor dinamismo. En este periodo se pronunciaron 45 sentencias, casi la mitad, en las que se juzgó a 211 inculcados, un 60% del total. La sentencia nº 40, de 20 de octubre, involucró a 119 personas, vecinos de San Pedro de Palmiches, Albendea, Arandilla del Arroyo, Atalaya del Cañavate

24 "Copia del Decreto del Ministerio de Justicia de 29 de noviembre de 1937, por el que se crean Tribunales especiales de Guardia para reprimir los delitos de espionaje, alta traición y derrocamiento". AHN, FC, CG, 1642, Exp.79.

25 "Copia del Decreto del Ministerio de Justicia de 22 de junio de 1937, por el que se crea el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y se definen los delitos y las penas". AHN, FC, CG, 1642, Exp.76.

26 El desempeño de este cargo se producía el 27 de mayo de 1938, por Orden del Ministerio de Justicia, ante la vacante de Victoriano Juvencio Escribano Ruipérez, incorporado a filas. BOPC, nº 70, pp. 295, 13/06/1938.

27 Estos individuos habían permanecido ocultos en el pueblo desde el principio de la guerra motivados por la idea de no servir a la causa republicana debido a "sus caracterizadas ideas fascistas", a pesar de que sus quintas habían sido llamadas para línea de combate y servicios de fortificación. El 1 de junio fueron descubiertos y detenidos. Las penas no fueron iguales al considerar el Tribunal que los servicios que en filas estaba llamado a prestar Miguel revestían más gravedad que los de Jesús.

y Valdeolivas, juzgados todos por Alta Traición²⁸. La mayoría fueron absueltos. En otros casos, el Ministerio Fiscal retiró sus acusaciones y únicamente 7 fueron condenados a penas de entre 15-30 años de internamiento en campo de trabajo. Sobre José María Chirveches Millana, secretario de los Ayuntamientos de Arandilla del Arroyo y San Pedro de Palmiches, recayó la pena de muerte.

Gráfica 4. Relación sentencias-encausados (jun.-dic. 1938). Fuente: Libros de Sentencias de 1936-1937 y 1938. Elaboración propia

La edad media de los encausados es de 41 años²⁹. La cifra de mujeres juzgadas es muy relevante a pesar del mayor número de hombres, 137 y 210, respectivamente. De ellos, un 70 % son casados, un 17% solteros, un 6% viudos y un 7% se desconoce su estado civil. Por colectivos profesionales (gráfica 5), las categorías “sus labores” y “labradores” muestran un predominio abrumador sobre el resto. Entre ambos, suman 182 encausados, o lo que es igual, más de la mitad de los procesados por el Tribunal a lo largo de sus funciones. Le siguen, muy alejados cuantitativamente, otros grupos como el de los industriales-comerciantes o los jornaleros.

Gráfica 5. Profesiones de los encausados. Fuente: Libros de Sentencias del Tribunal. Elaboración propia

²⁸ El Ministerio Fiscal estimaba, en virtud de las diligencias practicadas y autos, la existencia de una organización para facilitar evasiones a campo faccioso por los pueblos limítrofes de la provincia.

²⁹ No incluye aquellos inculcados en cuya descripción se cita “mayor de edad” o se obvia su edad, suponiendo un total de 21.

De un análisis de los delitos (tabla 5) se deduce que el más juzgado fue el de Alta Traición. Afectó a un 75% de los acusados. Buena parte de ellos fueron absueltos, principalmente, porque el Ministerio Fiscal no logró averiguar los hechos imputados o fue retirada su acusación en el momento de la vista oral. Entre los actos de aquellos que obtuvieron una condena distinta a la anterior y, por consiguiente, su participación directa y material en los hechos sí fue comprobada debidamente, destacan la facilitación de internamiento y evasión a campo faccioso; el favorecer con silencios y disimulos huidas a zona rebelde; la ocultación de mozos llamados a filas; la preparación de un complot; la elusión de funciones; la emisión de salvoconductos falsos; y la amenaza y agresión a autoridades republicanas.

La infracción en materia de subsistencias también fue una de las constantes en la Cuenca de 1938. Si bien 40 de los encausados por este delito fueron absueltos —por hechos no comprobados, resultar ser otro tipo de delito no competencia del Tribunal o considerarse que no constituían infracción—, el resto se sancionaron con multas de 1000 a 25000 pesetas que, en caso de insolvencia, debían traducirse en días o meses de trabajo en beneficio del Estado, provincia o municipio. En cuanto a los delitos de derrotismo y espionaje tienen menor representación en el conjunto, aunque no por ello dejan de ser significativos. Entre los acusados por derrotismo cabe destacar hechos como haber desmoralizado y haber producido perturbaciones entre las tropas aludiendo que en la zona facciosa se trataba y se daba mejor comida a los soldados o manifestar la ineficacia ofensiva de la aviación republicana³⁰.

Tabla 5. Delitos y número de encausados

Delitos	Nº encausados
Alta traición	261
Derrotismo	9
Espionaje y alta traición	6
Infracción en materia de subsistencias	56
Sabotaje	1
Alta traición e infr. en materia de subs.	2
Acaparamiento	1
Ocultación y acaparamiento de artículos	5
Intercambio	5
Venta a precio abusivo	1

Fuente: Libros de Sentencias del Tribunal. Elaboración propia

Con relación a las sanciones impuestas (Gráfica 6), las penas de mayor calado se dieron de manera simultánea a lo largo del año. 167 personas fueron absueltas mientras que, en el polo opuesto, la pena de muerte se falló en 7 ocasiones por Alta Traición y espionaje, afectando a 20

30 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencias nº 18 de 26/07/1938; nº 24 de 09/08/1938; nº 35 de 06/10/1938.

personas³¹. Entre tanto, solo una pena inferior a 6 años fue dictada por el Tribunal³². Respecto al número de multas, apenas representa un 5 % del total de las penas. Buena parte se dictaron en los 3 últimos meses del año y se correspondieron con la ocultación y el acaparamiento de bienes de primera necesidad y la infracción en materia de subsistencias. Dentro de esta última se dieron casos como el de la especulación³³, la restricción comercial³⁴, el fraude³⁵, del intercambio ilegal³⁶ y la venta a precio abusivo tanto de líquidos como de alimentos³⁷. La cuantía más común asciende a 1000 pesetas, aunque el Tribunal llegó a multar con hasta 25000 pesetas, como fue el caso del industrial de Alcántud, Ricardo Guerrero Ortega³⁸. En buena parte de los casos expuestos el Ministerio Fiscal solicitó penas de varios meses de internamiento más penalización económica o multas de mayor cuantía, cosa que el Tribunal no aceptó y acabó rebajando. Las profesiones sobre las que recayeron las sentencias más duras fueron los militares, los jornaleros, los labradores y los obreros.

- 31 Esas sentencias se corresponden con: nº 7 de 9 de julio, a Daniel Astudillo Romera de la localidad de Fuertescusa por haber facilitado la evasión a campo faccioso de varios “traidores” y por contar con un grupo de 20 elementos derechistas armados con 60 fusiles para, en el caso de que los sublevados hostigaran a las fuerzas leales de la ciudad, incorporarse desde el interior de la retaguardia para su toma; nº 8 de 12 julio, a Cándido del Río López, secretario del Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz, por haberse evadido en el momento de ser llamado su reemplazo a filas, para lo cual utilizó una documentación falsa. Era detenido por el SIM en las proximidades de El Tovar; nº 13 de 20 de julio, a Luciano Checa Ortiz, Francisco López Moya y Julián Martínez Navarro de Rubielos Bajos, Villanueva de la Jara y El Peral, respectivamente, por haber sido los promotores del complot que nunca se llegó a ejecutar para asaltar el campo de aviación y el cuartel donde se alojaban las Brigadas Internacionales en Villanueva de la Jara; nº 20 de 29 de julio, a Ángel Blanco Chavarría, Julio Valiente Bonilla, José Gascuña Sánchez, Juan Antonio Sevilla Vaquero, José Cardenal Asensí y José Blanco Luengo, vecinos de Cañaveras y Cuenca, por formar parte de un grupo detenido en los montes de Vega del Codorno cuando marchaban a campo faccioso y enfrentarse a las fuerzas que le dieron asalto; nº 25 de 13 de agosto, a Antonio Rojo Gómez, Julián García de la Vega, Antonio Pérez Eguiluz, Tomás Picón de Castro, Jose Clavería Iglesias, Julián Sanz Plaza y Diego Gallardo Pastor, militares y fuerzas de Madrid, por haberles encontrado documentos que facilitaban la evasión; nº 30 de 22 de septiembre, a Antonio López Triguero de Canalejas del Arroyo, participe también en los sucesos de Vega del Codorno; y nº 40 de 20 de octubre, a José María Chirveches Millana, secretario del Ayuntamiento de Arandilla del Arroyo, por encabezar una organización para facilitar evasiones a zona rebelde. AAPC, Libro de sentencia del TEGC de 1938.
- 32 Recayó sobre el vecino de Cuenca, Gregorio Moreno Lacort. Procedimiento incoado en virtud de la Comisión de Abastos Municipal de la capital, este vaquero se dedicaba a vender leche aguada restando con ello valor nutritivo al alimento. AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 10 de 14/07/1938
- 33 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 53 de 29 octubre de 1938. El inculcado, además de vender el kg. de patatas a precio desorbitado, especulaba con el jabón a cambio de huevos
- 34 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 63 de 19/11/1938. Santiago Redondo Medina venía restringiendo la venta de artículos en su establecimiento comercial negando a los clientes que tuviera existencia de ellos, a cuyo efecto solo tenía en la tienda unas mantas y unas cuantas cajas vacías. No obstante, los agentes de policía descubrieron en un registro que en la trastienda tenía existencias suficientes para vender y que negaba al público.
- 35 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 94 de 31/12/1938. Pedro Villaescusa García vendía aceite en su comercio utilizando una medida de cuarto de litro que estaba falta de unos 40 gr. Defraudando, por tanto, una cantidad aproximada de 160 gr. por litro.
- 36 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 49 de 28/10/1938. Elena García Arnao se dedicaba desde principios de septiembre a intercambiar agujas de máquina por genero comestible; AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 72 de 26/11/1938. Julián Torrecilla Contreras, uno de los procesados y dependiente del comercio “El Barato”, en los últimos meses había hecho algunos intercambios de géneros del citado negocio por aves de corral y comestibles con las otras dos inculpadas. Los hechos se descubrieron el día 12 de noviembre en un registro que se extendió también al domicilio de Julián, donde vivía con sus dos hermanas. La policía incautó grandes cantidades y el comercio fue cerrado.
- 37 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 47 de 27/10/1938. Miguel Sánchez Casinos vendía botellas de anís a precio desorbitado; AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 89 de 12/12/1938. Gregorio García García, labrador y alcalde de Almodóvar del Pinar, vendió a últimos de noviembre huevos al precio de 20 pesetas.
- 38 AAPC, Libro de Sentencias del TEGC de 1938, Sentencia nº 28 de 07/09/1938. Tramitación incoada en virtud de oficio del comandante militar del Tercer Batallón Etapa, Compañía 5ª con destacamento en Priego, había ocultado en su casa-comercio convenientemente tabicada multitud de diversos artículos de tejidos, mercería y paquetería, restando con ello el abastecimiento de la población.

Gráfica 6. Penas impuestas. Fuente: Libros de Sentencias del Tribunal. Elaboración propia

Por último, en lo referente a la distribución geográfica de las penas, vecinos de 67 municipios tuvieron representación en este Tribunal. San Pedro de Palmiches constituye el pueblo con más implicados, 69, llamativamente todos en el mismo caso. Le siguen, distantes, Albendea, Cuenca, Madrid y Villanueva de la Jara que juntos suman 127 inculcados, lo que supone un 36% del conjunto. Por partidos judiciales, los fallos más graves se corresponden con Tarancón, Motilla del Palancar y Priego (tabla 6).

Tabla 6. Relación penas-partidos judiciales

Part. judicial	Muerte	>20 años	12-20 años	6-12 años	< 6 años	Multa	Absol.	Acus. retirada
Cuenca	1	1	-	3	1	10	26	-
Motilla del Palancar	3	4	2	13	0	2	29	-
San Clemente	1	-	-	1	-	1	12	3
Tarancón	5	5	-	3	-	1	7	-
Cañete	-	-	-	-	-	1	22	-
Priego	8	4	5	2	-	1	51	65
Belmonte	-	-	-	-	-	-	2	-
Huete	-	-	-	-	-	1	5	-
Desconocida	-	-	-	-	-	-	2	-
Otros	7	10	11	4	-	1	11	-

Fuente: Libros de Sentencias del Tribunal. Elaboración propia

CONCLUSIONES

Los dos Tribunales analizados han permitido profundizar en la realidad de la justicia republicana en guerra y, especialmente, aquella que se impartió en la retaguardia conquense. Como se ha indicado, estos Tribunales significaron la reabsorción de aquella violencia desencadenada al margen de la legalidad estatal por distintos grupos durante las primeras semanas del conflicto. Pese a su excepcionalidad inicial, fue normalizándose y cumpliendo con varios objetivos de su

creación: eludir la arbitrariedad y la crispación, ser ejemplar y eficaz defensivamente y servir de marco legal común para ajusticiar aquella violencia esencialmente política.

Las actuaciones del TEPC y del TEGC se centraron en contra de simpatizantes y enemigos potenciales del gobierno legítimamente elegido, pero también sobre personas afines al régimen por sus “excesos en la retaguardia”. Afectó, considerablemente, a varones de entre 20-40 años pertenecientes a las clases medias de la provincia, aunque también a un considerable número de mujeres. El TEPC castigó con severidad al inicio de su actividad a aquellos que habían cometido actos vinculados con la rebelión. La cúpula falangista, eje principal de la conspiración en la provincia, no tuvo posibilidad de juicio como sí ocurrió en otros espacios donde la sublevación triunfó algún tiempo o sus promotores habían sido encarcelados.

De forma progresiva, conoció otros delitos y sus sanciones fueron más benévolas, dictando un elevado número de fallos absolutorios. En comparación (tabla 7), su actuación fue similar a la ejercida por los Tribunales de Cartagena o Málaga, donde abundan las sanciones vinculadas con la prisión menor y la absolución; mientras tanto, sí se desprenden importantes diferencias respecto a otros Tribunales como los de Albacete, Alicante, Barcelona o Bilbao, donde el nivel sancionador adquirió mayor severidad como consecuencia de sus circunstancias internas. Entre tanto, el TEGC falló un importante número de penas de muerte a pesar de que la tónica general fue absolver, sobre todo a mujeres por delitos de subsistencias.

Tabla 7. Actuación de otros tribunales populares en %

	Albacete	Alicante	Barcelona	Bilbao	Cartagena	Málaga	Madrid
Encausados	809	648	427	403	351	557	566
Muerte	13,7	23,4	32,7	31,7		0,1	8,4
Absolución	19,5	25,1	5,1	10,9	25	82,5	41,8
Prisión	66,9	51,3	62	38,8	57,2	7,8	49,5

Fuente: Ortiz Heras, M. (1996) y Sánchez Recio, G. (1991)

La no conservación de la totalidad de sumarios y procedimientos o, al menos, un importante volumen de ellos limita el estudio y obstaculiza la evaluación de la actividad de los Tribunales populares conguenses. Igualmente, el hecho de que algunos de los más importantes dirigentes de la conspiración fueran fusilados antes del nacimiento de estos organismos de justicia nos ha privado de sus declaraciones que, sin duda alguna, habrían supuesto un testimonio muy valioso para conocer más profundamente la trama del “Alzamiento” en esta provincia, aun suponiendo lo tendencioso que pudieran haber sido.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBA, V. (1990). “De los Tribunales Populares al Tribunal Especial” en Ministerio de Cultura. *Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales*. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, pp. 223-238.
- ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, N. (1944). “Justicia Penal de Guerra Civil” en *Ensayos de Derecho procesal civil, penal y constitucional*. Buenos Aires, pp. 253-294.
- ALÍA MIRANDA, F. (2008). “Conspiración y alzamiento: principales modelos en Castilla-La Mancha”, en Alía Miranda, F. y Del Valle Calzado, Á. R. (coords.). *La Guerra Civil en Castilla-La Mancha*, 70

- años después. *Actas del Congreso Internacional*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 323-369.
- ALÍA MIRANDA, F. (2017). *La Guerra Civil en Ciudad Real: conflicto y revolución en una provincia de la retaguardia republicana*. Ciudad Real: Diputación Provincial, Biblioteca de Autores Manchegos.
- BERLINCHES BALBACID, J. C. (2015). *La violencia política en la provincia de Guadalajara (1936-1945)*. (Tesis doctoral. UNED). Recuperado de <http://espacio.uned.es/fez/view/tesisuned:GeoHis-Jberlinches>
- CANCIO FERNÁNDEZ, R. C. (2007). *Guerra Civil y tribunales: de los jurados populares a justicia franquista (1936-1939)*. Cáceres: Universidad de Extremadura.
- CERVERA GIL, J. (2006). *Madrid en guerra: la ciudad clandestina, 1936-1939*. Madrid: Alianza.
- GÓMEZ BRAVO, G. (2014). "Las lógicas de la violencia en la guerra civil: balance y perspectivas historiográficas" en *Studia Histórica. Historia Contemporánea*, 32, pp. 251-262.
- JACKSON, G. (1967). *La República española y la guerra civil, 1931-1939*. México.
- LEDESMA VERA, J. L. (2010). "Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana" en Espinosa Maestre, F. (ed.). *Violencia roja y azul*. Barcelona: Crítica, pp. 152-247.
- LÓPEZ VILLAYERDE, Á. L. (1997). *Cuenca durante la II República*. Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca. Sección de Publicaciones y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- MARTÍN NIETO, I. (2014). "Muerte en la Alcarria. Violencia revolucionaria y anarquismo en Guadalajara durante la guerra civil española" en *RUHM*, 6, Vol. 3, pp. 28-53.
- MERA SANZ, C. (2011). *Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista*. Madrid: La Malatesta Editorial.
- MINISTERIO DE CULTURA (1990). *Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales*. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos.
- MORADIELLOS GARCÍA, E. (2016). *Historia mínima de la Guerra Civil española*. Madrid: Turner.
- MORCILLO ROSILLO, M. (1988). "Los tribunales populares durante la Guerra Civil en Albacete (Los paseos de la muerte)" en *Ensayos*, nº 2, pp. 121-132.
- MUÑOZ DE MORALES CORRAL, M^a. C. (2007). "Los Tribunales Populares en la Guerra Civil Española: Jurado de Urgencia, Tribunal Especial Popular y Tribunal Especial de Guardia en la Provincia de Ciudad Real (1936-1939)" en *España entre repúblicas, 1868-1939: actas de las VII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos*, Vol. 2, pp. 991-1008.
- ORTIZ HERAS, M. (1995). *Violencia, conflictividad y justicia en la provincia de Albacete (1936-1950)*. Tesis doctoral. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- ORTIZ HERAS, M. (1996). "La justicia republicana en guerra: el tribunal especial popular de Albacete" en *Al-Basit: Revista de estudios albacetenses*, nº. Extra-1, pp. 23-40. [Consultado: 07 de septiembre de 2018] <<http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/ALBASIT/AlbGOrtiz.pdf>>.
- RODRIGO, J. (2008). *Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista*. Madrid: Alianza.
- RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B. (2003). *La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). Del 18 de julio a la Columna del Rosal*. Madrid.
- RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B. (2004). *La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). La pugna ideológica y la revolución*. Madrid.
- RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B. y DE LA ROSA RICO, R. (2009). *Represión y Guerra Civil en Cuenca. Nuevos testimonios y fotografías*. Cuenca: Gráficas Cuenca.

- ROLDÁN CAÑIZARES, E. (2014). "La evolución competencial de los Tribunales Populares de la II República" en *Revista Internacional de Pensamiento Político*, Vol. 9, pp. 425-440.
- ROLDÁN CAÑIZARES, E. (2018). "La justicia de la II República española en guerra. Una aproximación historiográfica" en *Revista de historiografía*, nº 29, pp. 37-54.
- RUIZ, J. (2012). *El Terror Rojo*. Barcelona: Espasa.
- SABÍN RODRÍGUEZ, J. M. (1994). "El Tribunal Popular de Toledo: 2 de septiembre a 19 de octubre de 1936" en *Anales toledanos*, 31, pp. 307-318.
- SÁNCHEZ RECIO, G. (1991). *Justicia y guerra en España: los tribunales populares (1936-1939)*. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
- SÁNCHEZ RECIO, G. (1994). "El control político de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Los tribunales populares de justicia" en *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie V, H. Contemporánea, t. 7, pp. 585-598.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (1998). *Castilla-La Mancha contemporánea (1800-1975)*. Madrid: Celeste Ediciones.
- SEVILLANO CALERO, F. (1995). *La Guerra Civil en Albacete. Rebelión Militar y Justicia Popular (1936-1939)*. Tesis doctoral. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert.
- SEVILLANO CALERO, F. (1995). "La Justicia Popular en Albacete durante la Guerra Civil (1936-1939)" en *Al-Basit: Revista de estudios albacetenses*, 37, pp. 115-134. [Consultado: 08 de septiembre de 2018] <<http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/ALBASIT/Alb37Sevillano.pdf>>.
- THOMAS, H. (1971). *La guerra civil española*, París.